Naciones Unidas E/CN.5/2014/NGO/42

Consejo Económico y Social

Distr. general
20 de noviembre de 2013
Español
Original: inglés

Comisión de Desarrollo Social
52º período de sesiones
11 a 21 de febrero de 2014
Seguimiento de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social y del vigésimo cuarto período extraordinario de sesiones de la Asamblea General: tema prioritario: promoción del empoderamiento de las personas para lograr la erradicación de la pobreza, la integración social y el pleno empleo y el trabajo decente para todos

Declaración presentada por International Movement ATD Fourth World, organización no gubernamental reconocida como entidad consultiva por el Consejo Económico y Social

El Secretario General ha recibido la siguiente declaración, que se distribuye de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 36 y 37 de la resolución 1996/31 del Consejo Económico y Social.

13-57582X (S)

Se ruega reciclar

Declaración

Erradicación de la pobreza extrema mediante el empoderamiento y la participación

Introducción

A pesar de que en los últimos años se han logrado en algunas regiones del mundo progresos reales en materia de erradicación de la pobreza, el índice de pobreza multidimensional de 2013 muestra que 1.600 millones de personas de los 104 países analizados todavía viven en una pobreza multidimensional, definida como una privación múltiple y simultánea, a nivel individual, en las esferas de la salud, la educación y las condiciones de vida. La experiencia muestra que no hemos conseguido llegar a los grupos de población más vulnerables, que son los más afectados tanto por la degradación ambiental como por la exclusión social y económica. Además, las políticas y los proyectos de desarrollo no han tenido el efecto deseado en las poblaciones destinatarias, y muchos de ellos incluso han contribuido a aislar y desplazar a los más vulnerables.

En este contexto, acogemos con satisfacción el tema central del 52ª período de sesiones de la Comisión de Desarrollo Social, que trata sobre la "promoción del empoderamiento de las personas para lograr la erradicación de la pobreza, la integración social y el pleno empleo y el trabajo decente para todos". El empoderamiento, cuando se traduce en una participación efectiva y significativa, es una afirmación del derecho de cada persona y cada grupo a tomar parte en la dirección de los asuntos públicos. De conformidad con los principios rectores sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, adoptados por el Consejo de Derechos Humanos en su resolución 21/11, el empoderamiento es también un medio de promover la inclusión social y un elemento esencial para luchar contra la pobreza y para garantizar que las políticas públicas se diseñen en aras de satisfacer las necesidades expresadas por los segmentos más pobres de la sociedad y sean sostenibles.

Contribución por parte de las personas que viven en la pobreza extrema a la definición y la medición de la pobreza

Una mujer que vive en la pobreza extrema en el Perú describió así su situación: "Lo peor de vivir en condiciones de pobreza extrema es el desprecio; que te traten como si no valieras nada, que te miren con asco y miedo, y que incluso te traten como si fueras un enemigo. Nosotros y nuestros hijos pasamos por esto cada día, y nos hiere, nos humilla y nos obliga a vivir con miedo y vergüenza".

Aunque se han alcanzado considerables progresos en la tarea de entender la pobreza como un fenómeno multidimensional, se ha dado excesiva importancia a las formas tradicionales de medir la pobreza sobre la base de los ingresos o el consumo. Estas dimensiones económicas de la pobreza son importantes y realmente fáciles de cuantificar, pero solo nos han ofrecido una parte del concepto de pobreza, por cuanto ignoran elementos como la discriminación, el aislamiento, la inseguridad, la violencia, la falta de voz y de control, y no consiguen reflejar los efectos de todas estas carencias en la vida de las personas. Por lo tanto, las políticas y los programas diseñados para erradicar la pobreza carecen de coherencia y coordinación y están

mal adaptados a las necesidades y las realidades de las personas que viven en la pobreza extrema.

Para captar mejor las diferentes dimensiones de la pobreza, es necesario combinar medidas cualitativas y cuantitativas; escuchar las opiniones de las personas que viven en la pobreza extrema; y elaborar nuevas medidas y combinar indicadores. Asimismo, es importante recopilar datos desglosados (y que los países los comuniquen) que permitan medir y hacer un seguimiento del éxito basándose en el quintil más bajo de cada país.

Un entorno propicio para el empoderamiento y la participación

Todas las formas de discriminación, incluidos la estigmatización y los prejuicios, marginan a las personas que viven en la pobreza extrema de los procesos de adopción de decisiones que afectan a sus vidas. Otras barreras, como la falta de confianza y las diferentes prioridades de los interesados, así como la falta de documentos de identidad entre los pobres, disuade a las personas que viven en condiciones de extrema pobreza de participar de forma activa. Estas barreras también impiden que las personas que viven en la pobreza tengan acceso a los servicios públicos básicos en las esferas de la salud y la educación.

Para que las poblaciones más marginadas puedan participar de manera efectiva, es esencial crear un entorno propicio que respete y proteja los derechos humanos fundamentales. Además, para diseñar programas y proyectos que mitiguen los efectos de la pobreza extrema, los interesados deben integrar los conocimientos de las personas que se enfrentan cada día a diferentes aspectos de la pobreza.

El empoderamiento también requiere un compromiso por parte de las autoridades o las personas que están en el poder. A este respecto, los principios rectores sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, basados en valores y normas internacionales de derechos humanos, son una herramienta práctica que pueden usar los Estados para diseñar sus programas de erradicación de la pobreza.

Promoción del trabajo decente y aplicación de la recomendación núm. 202 de la Organización Internacional del Trabajo

Con tecnología avanzada y un mercantilismo en rápida expansión, el mundo ha visto cómo se consumen los limitados recursos naturales y disminuye la protección laboral. La comunidad internacional debe adoptar un planteamiento del sistema económico globalizado que esté basado en los derechos humanos y promueva el trabajo decente. Es preciso invertir financiación pública y privada con vistas a garantizar unos ingresos justos y un ambiente de trabajo seguro para todos, ofreciendo protección social a los trabajadores y sus familias y apoyando a los trabajadores en el sector no estructurado de la economía. Las leyes y los reglamentos laborales deberían proteger los empleos decentes y fomentar una economía responsable desde el punto de vista social y ambiental.

La aplicación de la recomendación núm. 202 relativa a los pisos nacionales de protección social de 2012 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) garantizaría que todas las personas, en particular las más excluidas, recibieran un nivel básico de protección social que les permitiera hacer frente al desempleo y las crisis en los mercados de trabajo de la economía estructurada y no estructurada.

Un planteamiento de la seguridad y la protección sociales basado en los derechos parece la forma más eficaz de garantizar que el derecho a un nivel de vida adecuado se haga realidad; de eliminar la marginación y la exclusión; y de crear las condiciones necesarias para que haya una oferta de un trabajo decente para todos.

Educación de calidad para todos basada en la cooperación entre los interesados

La educación y la formación de calidad son esenciales para ayudar a las personas que viven en la pobreza extrema a adquirir las competencias necesarias para contribuir a la sociedad de manera efectiva. Mediante la cooperación con los asociados internacionales, nacionales y locales, los Estados deberían esforzarse por eliminar todos los obstáculos que impiden el acceso de los estudiantes a una educación de calidad.

A nivel local, los programas educativos deberían prever recursos que permitan llegar a los estudiantes que viven en las comunidades empobrecidas y en situación de exclusión social, reducir los costos financieros secundarios de la educación (como el transporte y los uniformes, entre otros) y ofrecer apoyo financiero cuando sea necesario para compensar dichos costes.

Las escuelas deben crear entornos seguros y favorables, en los que todos los interesados —los estudiantes, los padres, el personal educativo y los miembros de la comunidad— puedan asociarse en favor de la elaboración de programas educativos adecuados al contexto que reconozcan que las vías alternativas hacia la calidad educativa (esto es, los cursos de aprendizaje y las pasantías) son fuentes legítimas de conocimiento. Todos los niños deberían terminar sus estudios secundarios con los conocimientos necesarios para trabajar, incluidas las competencias técnicas y profesionales.

Asimismo, las escuelas deberían introducir medidas para eliminar todas las formas de discriminación y estigma en el entorno escolar. Deberían formar a los profesores y al personal de las escuelas para que entiendan los efectos de la pobreza extrema y otras manifestaciones de la exclusión social, y proporcionarles el conocimiento necesario para que puedan prestar un apoyo efectivo a los estudiantes que están en situación de dificultad.

Promoción de la buena gobernanza participativa

Tal como ponen de relieve los principios rectores sobre la pobreza extrema y los derechos humanos, “[l]os Estados deben garantizar la participación activa, libre informada y provechosa de las personas que viven en la pobreza en todas las fases del diseño, la aplicación, la vigilancia y la evaluación de las decisiones y políticas que las afectan [...]. Debe ponerse especial cuidado en incluir plenamente a las personas más pobres y más excluidas de la sociedad”. Es fundamental garantizar dicha participación, de forma que las personas que viven en la pobreza extrema puedan contribuir con su conocimiento y su experiencia a los procesos de gobernanza. Los procesos políticos deberían aumentar la participación efectiva de los más excluidos mediante diálogos entablados en un entorno de respeto mutuo y colaboración.

Las organizaciones de la sociedad civil pueden desempeñar un papel importante prestando ayuda a las personas que viven en la pobreza extrema para que

adquieran un papel activo en la aplicación, el seguimiento y la evaluación de los programas de desarrollo y los procesos políticos. Los Estados y las instituciones internacionales deberían garantizar la transparencia en todos los niveles del gobierno por medio de mecanismos adecuados de rendición de cuentas, que incluyan inspectores generales y procedimientos judiciales independientes.